

Política y Globalización

Alternativas Socialdemócratas

*Dr. Alejandro Chanona Burguete**

A principios del Siglo XXI la sociedad internacional está experimentando cambios sucesivos a una velocidad inédita para la humanidad. En el marco del proceso de Globalización, los cambios mundiales son cada vez más rápidos e inciertos, acompañados de una transformación de patrones que van del uso intensivo del capital al uso intensivo del conocimiento y la información, gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación.

El incremento de la interdependencia entre los Estados y la presencia de una serie de fenómenos de carácter transnacional, que van desde la estructuración de grandes empresas y nuevas formas de producción hasta cuestiones como el crimen organizado, el terrorismo, o la degradación medioambiental, concretamente el cambio climático, constituyen elementos intrínsecos de la reestructuración mundial que enfrentamos en la actualidad.

Sin duda, estamos frente a una reconfiguración de la sociedad internacional muy distinta a las anteriores en el marco del sistema capitalista mundial, misma que, mientras enfrenta los desencantos sobre los limitados resultados que en materia de desarrollo ha tenido la Globalización Económica Capitalista, se caracteriza por el incremento de la violencia en el sistema internacional y por la preeminencia de los temas de seguridad en la agenda mundial.

Tras la caída del Socialismo Real, los liberales decretaron “el fin de las ideologías” con el triunfo del Capitalismo y de los sistemas democráticos, bajo la promesa de que el desarrollo de todos los rincones del planeta sería una realidad. De esta manera, todos los Estados enfrentaron su inserción a la economía capitalista mundial, teniendo la necesidad de crear estrategias que les permitieran adaptar sus economías a competir y adaptarse con eficiencia a éste. No obstante, en el caso de la mayoría de los países en desarrollo, las estrategias se han orientado hacia la resistencia ante los embates de los mercados globales que, bajo esquemas generalmente especulativos, desestabilizan fácilmente a aquellas sociedades en donde el Estado es débil.

La realidad ha superado a las promesas liberales: la Globalización enfrenta una profunda crisis ética retratada en la marginación social a lo largo y ancho del planeta; tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, las crisis sociales se están agudizando como producto de las brechas que ha abierto la Globalización y de la incertidumbre que la acompaña. En el caso de América Latina, los precarios resultados en materia de desarrollo social que ha dejado el modelo neoliberal impactan negativamente las transiciones y consolidaciones democráticas, que a su vez enfrentan los desafíos de la generación de nuevos pactos sociales y diseños institucionales.

* Doctor en Ciencia Política y Maestro en Estudios Políticos Europeos por la Universidad de Essex, Inglaterra. Presidente del Consejo Directivo de la Fundación por la Socialdemocracia de las Américas y Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, Cámara de Diputados.

En consecuencia, podemos afirmar que si bien el proceso de Globalización ha posibilitado el incremento de la interconectividad mundial, no ha propiciado mejores niveles de integración social, ni el desarrollo de la noción de *responsabilidad común* o *responsabilidad global* en temas compartidos por toda la comunidad internacional, que van desde los aspectos ambientales como el cambio climático o la depredación de los ecosistemas, pasando por los temas sociales como la lucha contra la pobreza, las pandemias, la prevención de conflictos y el combate al terrorismo; hasta llegar a asuntos como la regulación de la biotecnología y la recomposición de la arquitectura financiera internacional.¹

El problema, como lo ha señalado Stiglitz, no es la Globalización en si misma, sino la forma en que se dirige y controla,² por lo que el Estado Nación se encuentra inmerso en el debate sobre la defensa de su soberanía, las políticas que debe llevar adelante para enfrentar los embates del Capitalismo global y el aprovechamiento de las condiciones para potenciar su desarrollo.

En este contexto, los Estados han optado por el repliegue a los espacios regionales, por lo que la región se erige en el vehículo, el catalizador y la gran opción para el desarrollo y la supervivencia del Estado nacional.

Globalización y Crisis de la Política Internacional

Bajo este panorama de incertidumbre mundial, durante los últimos años he venido afirmando que la **política internacional** superpone por lo menos tres crisis: dos estructurales (el derrumbe de la hegemonía transnacional y la crisis ética de la Globalización) y una coyuntural (la *securitización* de las agendas internacionales).

a) **El derrumbe de las reglas de hegemonía transnacional.** El sistema capitalista mundial enfrenta una crisis estructural donde **las reglas de una posible hegemonía transnacional capaz de dotar de estabilidad al Mundo se han venido abajo** desde el derrumbe del muro de Berlín, la extinción de la Unión Soviética, la reunificación alemana, la disolución de Yugoslavia, la guerra del Golfo Pérsico, las tristes historias del nuevo Sarajevo, el hambre endémica en Etiopía, el genocidio en Ruanda, y desde luego las grandes incapacidades de solución a los enormes problemas mundiales de guerra y hambruna discutidos por las Naciones Unidas durante la *Cumbre del Milenio*, hasta llegar hoy al periodo posterior a los dramáticos *11 de septiembre de 2001*, *11 de marzo de 2003* y *7 y 21 de julio de 2005*, sólo por mencionar algunos casos. Esto se ha visto acompañado de una urgente búsqueda de nuevos paradigmas, propuestas teóricas y enfoques analíticos sólidos y plausibles sobre la nueva dialéctica de la Economía Política Global de principios de siglo.

¹David Held, *Global Covenant. The Social Democratic Alternative to the Washington Consensus*, Polity Press, Inglaterra, 2004, pp. 11-12.

² Cfr. Joseph E. Stiglitz, *El malestar en la globalización*, Taurus, Madrid, España, 2002.

b) **La crisis ética de la Globalización.** La proclama del “fin de la historia” y toda la propaganda que le acompañó, muy pronto tuvo que recular ante la siguiente crisis que acompañaría al fin de la confrontación bipolar: **la crisis ética de la Globalización Económica Capitalista.** La Globalización ha profundizado un conjunto de desigualdades e injusticias en el mundo que son la quintaesencia de la nueva Economía Política Global, la crisis de fondo es la ausencia de un claro vínculo entre *Globalización y ética*.

La desigualdad económica mundial es el nuevo Leviatán de nuestro tiempo. Todos reconocen los riesgos de la creciente brecha entre países pobres y ricos. Este es el reto a vencer en la sociedad internacional del Siglo XXI. Desde Davos en 1999, pasando por Seattle, Milán, la cumbre el “Consenso de Monterrey” en torno a la Conferencia de la Naciones Unidas para la Financiación al Desarrollo en el año 2002, hasta hoy (2007), las expresiones anti-sistémicas y anti-capitalistas son cada vez más amplias y organizadas; de hecho encuentran una expresión más organizada en el Foro Social de Sao Paulo, Brasil.

Los países que participan en las relaciones económicas capitalistas contemporáneas han presenciado a nivel planetario el creciente ensanchamiento de la brecha de niveles de desarrollo entre el Norte y el Sur, entre los países industrializados y los países en búsqueda de opciones de desarrollo. Es tal el límite al que se ha llegado que los organismos financieros internacionales son ahora grandes promotores de la búsqueda de vínculos entre la *ética y la Globalización*, con la finalidad de identificar los parámetros de la responsabilidad internacional de los grandes capitales y de quienes lo detentan.

Antes del 11 de septiembre de 2001, en el año 2000, las 189 naciones congregadas en Nueva York en la sede de las Naciones Unidas, se manifestaron una y otra vez en torno a la desigualdad mundial, la pobreza, la salud y la nutrición. También abordaron temas centrales como la reforma de la ONU, el combate al SIDA, la educación, la preservación del medio ambiente, la seguridad internacional, y en particular las guerras intestinas en el África. La ONU sigue buscando la construcción de una *responsabilidad global*. La tarea no es sencilla pero es urgente e impostergable. Sin embargo, las metas de desarrollo acordadas en la Declaración del Milenio están aún lejanas. Hoy todo esto sigue, en el mejor de los casos, estancado, aunque en realidad parece que involuiona.

Los datos más recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señalan que en América Latina el 39.8% de la población (209 millones de personas) viven en la pobreza, de los cuales 15,4% (81 millones) son indigentes. En países como Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay los niveles de pobreza superan el 60%, con porcentajes de pobres extremos que sobrepasan el 30%.³

Aún más: uno de los rasgos más terribles de la región es la marcada concentración del ingreso, incluso en comparación con regiones de menor desarrollo social y con niveles de pobreza más elevados como el África Subsahariana, lo que contribuye a la polarización y segmentación social. Los datos indican que los grupos más ricos de la región (10% de la población) concentran en promedio un 36% de los recursos, superando el 40% de los mismos en países como Bolivia, Brasil, Colombia y Nicaragua. En tanto que los estratos

³ CEPAL, *Panorama Social de América Latina 2006*, CEPAL, Santiago de Chile, diciembre de 2006.

más pobres de la población (40% de los hogares) captan en promedio únicamente el 14% del ingreso total, indicador que alcanza sus niveles más bajos en Bolivia (9,5%) y República Dominicana (10,4%), seguidos por Brasil (11,9%), Guatemala (11,3%) y Honduras (11,3%).⁴

En el caso de México, el 39.4% de la población se encuentra en situación de pobreza, de los cuales el 12.6% se ubica por debajo de la línea de la indigencia (pobreza extrema), en tanto que en materia de concentración del ingreso, el 10% de la población más rica capta el 35.4% de la riqueza nacional, frente a un 15.4% que corresponde al 40% más pobre. Ello ubica a nuestro país entre los 10 países más inequitativos de la región.

c) La crisis coyuntural: securitización de las agendas internacionales. La crisis de carácter coyuntural se abrió con los atentados terroristas a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, que aceleraron cambios en la política internacional que todavía deparan nuevas sorpresas. Desde entonces, la agenda de la seguridad “dura” ligada a la lucha contra el terrorismo se impuso sobre cualquier otro tema de la agenda internacional. Dinámica potenciada tras los ataques terroristas de Madrid en 2004 y Londres en 2005 y de la que no se ve una salida pronta. A partir del “estás conmigo o contra mí” de Estados Unidos, prevalece la polarización de la sociedad internacional.

La *Realpolitik* ha confirmado su regreso al escenario internacional, por lo que el tratamiento de los temas del desarrollo se ha subordinado a dicho enfoque. El regreso del realismo a la política internacional de principios de siglo se combina con el creciente descontento de grandes sectores de la sociedad internacional por la imparable expansión de la desigualdad económica y social. Las voces que claman por retomar la agenda de desarrollo son cada vez mayores, al lado de las que reclamamos la ampliación de la agenda de seguridad internacional en los que temas como el cambio climático ha tomado relevancia en los últimos meses.

Las interacciones de estas tres crisis imponen un reto a la imaginación para argumentar con sensatez qué se debe hacer y proponer. De cara a la crisis ética de la globalización y a los procesos mundiales y nacionales que estamos enfrentando, hay que reafirmar que la ideología importa y mucho. El falso argumento sobre el “fin de las ideologías” de Fukuyama ha quedado superado y el ideario socialdemócrata tiene la oportunidad de penetrar y ser gobierno al ofrecer una alternativa entre los extremismos de derecha e izquierda. Una visión de mundo en la que el bienestar individual y colectivo de las sociedades, a partir del fortalecimiento democrático y la equidad social, sean motivo y fin.

⁴ *Ibid*

La Opción Socialdemócrata

Frente a un mundo que sufre cambios sociales constantes, la aportación más importante del paradigma socialdemócrata radica en la aplicación de valores democráticos y sensibles a las principales causas sociales, a la interpretación y construcción de la sociedad. La socialdemocracia es un proyecto político moderno y progresista comprometido con la construcción de la democracia social, donde el buen funcionamiento de los mercados se conjuga con acciones políticas siempre destinadas al desarrollo y progreso de la humanidad.

Como toda corriente ideológica, la socialdemocracia debe ser concebida como una *visión de mundo*. Es decir, como un conjunto de aspiraciones, ideas, valores y principios que determinan nuestras acciones y decisiones. En este sentido, los socialdemócratas nos conducimos por valores y principios como la igualdad, la equidad, la libertad, la corresponsabilidad, la tolerancia, el pluralismo, la justicia social, la solidaridad, la inclusión, la participación ciudadana, la defensa de los derechos humanos, la promoción del desarrollo sustentable, el fomento de la gobernabilidad y el internacionalismo. En este sentido, la socialdemocracia retoma lo mejor del liberalismo democrático como lo es la libertad y la democracia y los principios del socialismo democrático como la justicia social, la equidad y la igualdad.

Con base en lo anterior, se desprende un proyecto político progresista que, a través de las instituciones, busca profundizar las prácticas democráticas y atender las demandas y necesidades sociales, conduciendo al desarrollo y bienestar de las mayorías sin detrimento de los derechos elementales de las personas. **La esencia de la socialdemocracia ha sido y es la búsqueda de los medios necesarios para alcanzar las mayores cuotas de libertad, igualdad y bienestar entre los miembros de toda la sociedad.** Frente a la ideología de la lucha de clases, la socialdemocracia aboga por la solidaridad de clases.

La socialdemocracia reconoce y respeta la identidad e integridad de los individuos, pero también fortalece y promueve la vida colectiva. Por lo tanto, nuestra ideología aspira a construir una sociedad incluyente y tolerante, donde todos los individuos puedan realizarse plenamente, viviendo en comunidad. La coexistencia de visiones, opiniones y proyectos diversos en la sociedad no deben interpretarse como amenazas a la armonía social, por el contrario, se trata de elementos que enriquecen y alimentan nuestro desarrollo como seres humanos. Así, la posibilidad de convivir en paz sólo puede ser asegurada por un Estado garante de la equidad social.

Por su naturaleza reformista y pragmática, la socialdemocracia se ha erigido como una alternativa viable y deseable de centro-izquierda que ofrece soluciones moderadas que denuncian los extremos del conservadurismo de derecha y el autoritarismo de la izquierda radical. Asimismo, se trata de un proyecto político que reconoce los desafíos que impone la realidad mundial inmersa en el proceso de Globalización, sin olvidar los compromisos sociales y sin caer en prácticas populistas que imposibilitan el proceso de consolidación democrática. En suma, el proyecto socialdemócrata se presenta como una propuesta moderna y responsable con gran sensibilidad social que ofrece soluciones oportunas.

Siguiendo a Anthony Giddens, las seis áreas de política de un proyecto político progresista son las siguientes:

1. Una nueva política o "segunda oleada de democratización" en la que se acude directamente al pueblo.
2. Una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil que los "una entre sí".
3. Políticas de oferta a través de la inversión social, principalmente en proyectos de educación e infraestructura.
4. La reforma fundamental del Estado de Bienestar mediante la creación de un nuevo equilibrio entre el riesgo y la seguridad.
5. Una nueva relación con el medio ambiente mediante la "modernización ecológica".
6. Un fuerte compromiso con las iniciativas transnacionales en un mundo de "soberanía borrosa".⁵

No existen recetas únicas para aplicar los principios socialdemócratas, cada Estado en su particularidad debe buscar los canales, los tiempos y los espacios para realizar su ejecución. No obstante, el desarrollo de la socialdemocracia en un país depende de dos condiciones fundamentales, o compromisos institucionales:

- a) El compromiso entre los gobernantes y los ciudadanos, que se desprende de las raíces de la ideología democrática liberal y en la práctica tiene que ver con el desarrollo de una relación simétrica y congruente entre los hacedores de políticas públicas y los ciudadanos, e incluye la rendición de cuentas y la transparencia.
- b) El compromiso ente el capital, el trabajador y el Estado en aras de estimular el desarrollo de las instituciones del mercado, la propiedad privada y establecer un marco regulatorio que garantice tanto las libertades y derechos civiles y políticos de los ciudadanos, como las condiciones sociales necesarias para que la gente disfrute dichas garantías. Los socialdemócratas aceptamos que el mercado es fundamental para generar el crecimiento económico, pero debe regularse en aras de lograr la distribución del ingreso y sociedades justas y equitativas.⁶

En consecuencia, los socialdemócratas asumimos el compromiso de luchar en la arena política, económica y social para moldear y transformar los intereses del capital y del Estado en un paquete balanceado entre la economía de mercado y el Estado de Bienestar con base en reglas políticas claras.⁷

⁵ Anthony Giddens, *cit. pos.* Ralph Dahrendorf, *La Tercera Vía* en *El País Digital*, 1999. Disponible en Internet en: http://www.politica.com.ar/tercera_via/Dahrendorf_Tercera_via.htm, 14 de febrero de 2007.

⁶ David Held, *Op.Cit.*, pp. 13.

⁷ *Ibid*, pp. 14.

La Socialdemocracia en el Poder: la Política Económica de los Gobiernos Progresistas

Al igual que existe un abanico de izquierdas, en el espectro político mundial podemos también ubicar una variedad de socialdemocracias, dependiendo de las características propias de los partidos o coaliciones en el poder. Sin embargo, podemos establecer un piso mínimo de características para considerar o no un gobierno como socialdemócrata, o bien progresista: apego a la institucionalidad, la legalidad y acceso al poder por los mecanismos de la democracia; el Estado comprometido con garantizar la equidad social (énfasis en programas sociales-regulación de las distorsiones del mercado) en un marco de libertad de mercado; así como el respeto a los derechos y libertades fundamentales.

En los últimos años, el desencanto social con los resultados económicos del proceso de Globalización ha posibilitado en América Latina la llegada al poder de líderes con claro perfil progresista cuyas políticas económicas han reportado avances en materia social que no debemos dejar de estudiar. Se trata de gobiernos cuya política económica se ha comprometido con el respeto a las reglas del libre mercado y con la estabilidad macroeconómica del país, combinándola con una serie de políticas que atiendan los *macrodesequilibrios* sociales.

Chile

Desde el tránsito a la democracia, el modelo chileno se ha caracterizado por la continuidad en su política económica, a la que se ha llamado “reformas a las reformas”, pues hubo un perfeccionamiento del modelo de mercado heredado de la dictadura que fortaleció el componente social y corrigió graves fallas de la política económica.

El eje central de la política económica de la Concertación Democrática ha sido la conciliación de equilibrios macrosociales y macroeconómicos, un “cambio en la continuidad”. El objetivo ha sido la instauración de una política económica que resultase legítima en el nuevo marco democrático, por lo que el objetivo ha sido lograr el crecimiento con equidad.⁸ El “cambio en continuidad” de los gobiernos de la Concertación se ha basado en la reducción de la vulnerabilidad externa por medio de la limitación de capitales especulativos y la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED); la reforma tributaria de 1990; la reforma laboral y educativa, el incremento del gasto social y de la inversión pública y programas como Chile Solidario (incorporación a los indigentes a la red de apoyo social del Estado) y Chile Barrio (erradicación de campamentos- mayor inversión en vivienda).

Desde el tránsito a la democracia, todas las reformas han podido ser aprobadas gracias a un gran acuerdo entre gobierno, sindicatos, empresarios e incluso partidos de oposición a partir de coincidencias mínimas sobre la necesidad de continuar con la política macroeconómica sana y la apertura de mercados conciliada con una política social que garantice pisos mínimos de bienestar para la población.

⁸ Ricardo Ffrench-Davis, *Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Tres décadas de política económica en Chile*, Siglo XX, Buenos Aires, Argentina, 2004. pp. 37.

Bajo el gobierno de Michell Bachelet se pretende vigorizar el componente de la política social. Su Programa de Gobierno plantea que “la principal fuente de generación de empleo es el crecimiento”, a lo cual suma que la “economía moderna debe ser flexible y adaptable [...] pero flexibilidad no debe ser sinónimo de precariedad”, por lo cual el desafío es “conciliar agilidad ante los cambios con grados crecientes de protección social”.⁹

En este contexto Chile expandió su capacidad productiva al lograr tasas de crecimiento sostenidas del 7% anual durante los noventa, recuperándose de la caída al 2.2% de crecimiento del PIB en 2002 al 6.3% en el año 2005, si bien es cierto que en 2006 se registró nuevamente una caída para situar la tasa de crecimiento al 4.4%. En materia de indicadores de desarrollo, se ha logrado una reducción considerable de la pobreza en el país, de una tasa de 45% de la población en 1987 a 18.7% en 2005, mientras que la tasa de desempleo ha disminuido del 10% en 2004 al 7.9% en el año 2006.¹⁰

Brasil

El programa económico del gobierno de Luiz Ignacio “Lula” da Silva ha sido criticado por las alas más duras del Partido de los Trabajadores (PT) y de la izquierda brasileña al considerar que se trata de una “continuidad” de las políticas neoliberales del gobierno de Cardoso, que en su momento se definió como impulsor de la Socialdemocracia Brasileña. Al igual que sucedió con el primer mandato de Cardoso (1994-1998), el programa de Lula se califica como “liberal-desarrollista” en la medida en que acepta como premisa básica la necesidad de resguardar los equilibrios macroeconómicos acompañada de un estado regulador, inversión en sectores productivos y políticas que combatan la exclusión social.

De acuerdo a la “Carta a los Brasileños” de 2003, el gobierno de Lula defiende la disminución de la vulnerabilidad externa, una política firme de estímulo a las exportaciones y un Estado que estimule la producción y el empleo, sin retornar al proteccionismo o a la ampliación de las funciones empresariales del Estado. El Plan Plurianual, apuntó en su formulación hacia la conciliación entre el Estado planificador y promotor del desarrollo con inclusión social con la estrategia basada en sólidos fundamentos fiscales y monetarios. En consecuencia, se retoma el programa de reformas estructurales del gobierno de Cardoso (reforma previsional, reforma tributaria, reforma laboral) con un decidido impulso a la política social. De esta manera, la política económica del gobierno de Lula se ha orientado al desarrollo de una política fiscal más fuerte que la administración anterior, la reducción del gasto gubernamental, el incremento del salario mínimo, al fomento de la inversión pública y privada en sectores productivos y el despliegue de políticas sociales como el Programa Hambre Cero y la promoción de la construcción de vivienda.¹¹

⁹ Presidencia de la República de Chile. *Estoy contigo. Programa de Gobierno de Michelle Bachellet*, 18 de octubre de 2005, Santiago de Chile, Chile, pp. 102.

¹⁰ CEPAL, *Panorama Social de América Latina 2006* y CEPAL *Balance Preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2006*.

¹¹ Brasilio Sallum y Eduardo Kuglemas, “Gobierno de Lula ¿continuidad, avance o retroceso?” en: Carlos Álvarez (comp.) *La Argentina de Kirchner y el Brasil de Lula*, Prometeo-Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, Buenos Aires, Argentina, 2003, pp. 21-25.

La instrumentación de las propuestas en materia económica del gobierno de Lula han sido posibles en la medida que al inicio de su gobierno logró un consenso tanto los grandes capitales del país en aras de impulsar la competitividad, como con los trabajadores. Dentro del poder legislativo, el PT ha establecido alianzas con los partidos de centro e incluso con los de derecha que apoyaban al gobierno anterior.

En la campaña electoral para lograr la reelección, Lula defendió su programa económico a partir del combate a la exclusión social, a la pobreza y a la desigualdad y la profundización del nuevo modelo de desarrollo basado en el crecimiento con distribución de renta y sustentabilidad ambiental.

Brasil es uno de los países que presenta mayores retos en América Latina respecto a la pobreza y la concentración del ingreso, no obstante los resultados del gobierno de Lula se presentan como alentadores. El número de brasileños en pobreza se redujo prácticamente un 20% entre el 2003 y el 2005 (si bien de los 180 millones de habitantes Brasil tiene aún 42.6 millones de pobres). En tanto que el desempleo urbano se redujo del 11.5% en 2004 a 10% en 2006.¹²

Argentina

El gobierno peronista de centro-izquierda de Néstor Kirchner asumió la presidencia de Argentina en mayo de 2003 con el reto de remontar la crisis económica y política del año 2001. El programa económico de Kirchner se centra en la recuperación económica, la sustentabilidad a largo plazo con fuerte énfasis en la política social (indispensable en un país en el que se calculaba que, 18 de sus 36 millones de habitantes, encontraba en situación de pobreza) y la refinanciación de la deuda externa.

En su primer discurso como Presidente de Argentina, Kirchner hizo una vehemente defensa del Estado como articulador social de la función económica del mercado, "interviniendo allá donde éste excluye y abandona", esgrimió las nociones de "capitalismo nacional" y "modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento sustentable".¹³

La política económica de Kirchner ha sido calificada como "una extraña mezcla de políticas ortodoxas y heterodoxas", donde el impulso por la sanidad de la macroeconomía con políticas que garanticen la viabilidad económica del país y preserven su independencia frente a los organismos económicos internacionales; se combina con un renovado impulso a las empresas nacionales y al mercado interno así como políticas sociales que permitan remontar los indicadores de exclusión social. Dentro de la gestión de Kirchner destaca la renegociación de la deuda externa argentina con acreedores privados en un 75%, la cancelación de la misma con el Fondo Monetario Internacional¹⁴ y la política de no endeudamiento del país, al lado de un fuerte impulso a la inversión productiva, el

¹² CEPAL, *Panorama Social de América Latina 2006* y CEPAL *Balance Preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2006*.

¹³ Néstor Kirchner, *Discurso de toma de posesión como presidente de la República Argentina*, 25 de mayo de 2003.

¹⁴ El canje de Deuda con el FMI se postergó hasta 2005, una vez en marcha la recuperación económica y con suficientes reservas internacionales. En enero de 2006 el gobierno decidió cancelar la deuda argentina con el FMI, mediante un desembolso de 9 mil 530 millones de dólares.

incremento al salario y programas sociales como el Plan Integral para la Promoción del Empleo.¹⁵

Como resultado de esta serie de medidas económicas, Argentina ha logrado remontar la aguda crisis económica por la que atravesó durante el 2002, alcanzando tasas de crecimiento continuas superiores al 9% desde el año 2004, mientras que la pobreza se ha reducido al 31.4% de la población, frente a las cifras del 57.5% de octubre de 2002. Asimismo, la tasa de desempleo abierto se redujo de tasas del 19% en 2002 al 11.6% en 2005.¹⁶

Una Agenda Socialdemócrata para México

Para un país como México, caracterizado por la polarización política, la desigualdad social y la fragilidad económica, la apuesta por un modelo socialdemócrata es indiscutible. Por lo tanto, nuestra oferta y acción política deben encaminarse a la construcción y promoción de:

1. Una democracia integral y social que supere el nivel electoral y se extienda a todos los quehaceres de la vida.
2. Un Estado realmente democrático y garante, que asuma la responsabilidad de actuar socialmente con eficacia y garantice a la población el ejercicio de sus libertades y el disfrute de los mínimos de bienestar social.
3. Una sociedad civil activa y responsable que ejerza su rol en la construcción de su propio destino.
4. Un modelo económico que se desarrolle dentro del sistema de libre mercado con una intervención clara del Estado para establecer un equilibrio entre la libertad de los individuos y las necesidades básicas de la sociedad.
5. Un sistema social que defienda, promueva y garantice los derechos universales al trabajo, la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, la cultura y a un medio ambiente sano. Retomando una vez más a Giddens, el Estado de Bienestar pasivo tradicional debe reestructurarse en un "Estado de inversión social".

En suma, un proyecto socialdemócrata en nuestro país debe hacer énfasis en la búsqueda de mayores niveles de equidad e inclusión social frente a la persistente desigualdad social e inestabilidad política. Debemos dar solución a las demandas y exigencias sociales. Para ello, conviene insistir en llevar a cabo las reformas necesarias en los diversos ámbitos de la vida política y económica nacional. Aunado a lo anterior, fortalecer el Estado de Derecho y avanzar en la construcción de ciudadanía democrática nos permitirá tener la capacidad para tomar decisiones y dirigir el rumbo de nuestra nación hacia la consolidación de un México en el que imperen las prácticas democráticas y los valores éticos en el contexto de la Globalización. La reforma del Estado debe traducirse en la consolidación de un Estado garante y democrático.

¹⁵ Roberto Lavagna, *El caso argentino: lecciones macroeconómicas* en: Carlos Álvarez (comp.), *Op. Cit.*, pp. 11-18.

¹⁶ CEPAL, *Panorama Social de América Latina 2006* y CEPAL *Balance Preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2006*.